
PODER INSTITUCIONAL Y HEGEMONÍA SOCIAL

Ignacio Sotelo



El *Documento de Estrategia*, firmado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE con fecha de octubre de 1983, exige se le preste alguna atención. Se trata del primer escrito de política general que publica el PSOE desde que ha llegado al Gobierno; importa, por tanto, no sólo a afiliados y simpatizantes sino a cualquier ciudadano políticamente consciente.

No ha acabado nunca de convencerme la noción de «discusión interna», es decir, a puerta cerrada, que delata un tufillo conspiratorio que debiera haber desaparecido con la legalización de los partidos. Los partidos políticos son parte sustantiva de una sociedad libremente organizada; en consecuencia, actuación y debates deben contar con la máxima transparen-

cia. El deber de transparencia que asignamos a los cargos públicos hemos de realizarlo en mucha mayor medida en el interior del partido.

El 28 de octubre de 1982 empezó una nueva etapa en la historia de la democracia española, así como en la del Partido Socialista. Si fijamos la mirada en este

último, en tanto que «asociación civil», se comprueba con asombro que prácticamente se ha evaporado en el primer año de Gobierno socialista. Los socialistas

están presentes en la vida política española casi exclusivamente por su primacía en las instituciones, Gobierno, Parlamento, Gobierno y Parlamentos autonómicos, Ayuntamientos. Pareciera que el partido constase tan sólo de cargos públicos y hubiera reducido su actividad a la meramente institucional. El PSOE cuenta en España por su enorme peso en las instituciones del Estado; infinitamente menos por su presencia social. El Gobierno mantiene un apoyo social mayoritario gracias a su propia actuación y sobre todo a la falta de alternativas coherentes y viables, pero este consenso apenas proviene de la mediación del partido. De poco vale definir la primera tarea del partido en esta nueva etapa como «el sostenimiento y defensa de la acción del gobierno», si luego no se reúnen los requisitos mínimos para llevarla a cabo. Basta que la acción institucional encuentre críticas, y hasta oposición abierta, en un sector determinado para que se revele todo el alcance de la falta de presencia social del partido; allí donde se necesitaría es justamente donde no está.

1.

Ha saltado al ruedo el problema capital que tenemos planteado en la actual etapa: la *enorme distancia entre poder institucional y presencia social*. Formularlo con alguna precisión exige dilucidar, al menos, tres cuestiones previas: a) qué significa para una política socialista esta divergencia entre poder institucional y presencia social; b) cuáles son las causas que han conducido a esta situación; c) qué medios se consideran apropiados para cambiarla.

Ponerse de acuerdo sobre la significación parece lo más fácil: una política

**La acción del Gobierno
tiene que moverse
dentro de unos
estrechos
márgenes.**

socialista de democratización del Estado y de la sociedad resulta impensable sin un apoyo social inequívoco y mayoritario. Si a la derecha le basta para gobernar

una buena relación con los grupos de poder, un líder popular y una demagogia eficaz, sin desestimar por completo estos elementos, un gobierno socialista que quiera permanecer fiel a sí mismo precisa, además, de la mediación de un partido arraigado en la sociedad. Un gobierno de izquierda que no cuente con un amplio apoyo social, que no sepa movilizar a la sociedad a la vez que ser dinamizado por ella, muestra pronto síntomas de desgaste y acelera su sustitución; de ahí la urgencia de incardinar al partido en la sociedad como única forma de revitalizar la acción institucional. Si el partido no logra echar raíces profundas en la sociedad, difícilmente el Gobierno podrá llevar a buen término su actual programa de modernización y mucho menos sentar las bases para una «democracia avanzada». El proyecto socialista depende, en fin de cuentas, de la capacidad que el partido adquiera para *penertrar, articular y movilizar* a la sociedad, tres momentos distintos y complementarios que convendrá distinguir y combinar a la hora de poner en práctica una política de transformación social.

En el partido existe hoy un acuerdo, ampliamente mayoritario, en lo que se refiere al objetivo estratégico: la democratización a largo plazo de la sociedad y del Estado, lo que supone, como condición básica indispensable, una aproximación creciente entre poder institucional y presencia social. El ritmo y profundidad de las reformas dependen de esta correspondencia. Al dejar constancia de la enorme divergencia entre el poder institucional y la escasa presencia social, estamos a la vez marcando los estrechos márgenes dentro de los cuales tiene que moverse la acción del Gobierno. El que el partido no haya sabido transmitir a la opinión pública

más crítica y exigente los límites impuestos por los condicionamientos reales, así como por su débil instalación social, me parece un reproche justificado. Las reformas realizadas en este primer año y las proyectadas para el futuro inmediato no pueden sino ir rellenando el hueco ya existente entre el grado de desarrollo alcanzado por la sociedad española y la reducida, en algunas esferas incluso nula, eficacia de la acción institucional.

Conviene en este punto poner énfasis en una cuestión básica. Esta labor imprescindible de «aggiornamento» conlleva, por un lado, una carga conflictiva considerable para la que hay que estar preparado; por otra, es todo menos neutral, en cuanto a la dirección que se dé al proceso: a la larga consolidación de los poderes sociales establecidos o su debilitamiento, abriendo caminos para ulteriores acciones democratizadoras. Se suele designar a esta etapa de puesta a punto del aparato del Estado «modernización», pero no basta para modernizar —aquí radica una diferencia esencial con las demás corrientes liberales modernizadoras— sino que hay que hacerlo desde una perspectiva de más democracia. Enderezar la acción modernizadora a este objetivo de ampliación y profundización de la democracia exige desde ya una presencia social que los socialistas están muy lejos de haber conseguido.

En cuanto a las causas de la exigua presencia social del partido, lo menos que hay que decir es que los análisis que se manejan resultan insuficientes. Se cometería un error grave si esta diferencia abismal entre poder institucional y arraigo social se interpretase como mero fenómeno coyuntural, debido, en último término, a la absorción de los cuadros y militantes más valiosos para las tareas de gobierno. Ciertamente que el ritmo vertiginoso, y sobre todo las condiciones de la transición, han llevado consigo una fijación continua de los recursos humanos dispo-

nibles en funciones institucionales. Fue ya una hazaña el haber confeccionado las listas en las primeras elecciones municipales. Nadie puede olvidar a estas alturas que en el último congreso del exilio, celebrado en Suresnes en 1974, estaban tan sólo representados cuatro mil afiliados, la mitad viviendo fuera de España. Una desproporción ingente entre las tareas que impone el momento histórico y el número de militantes ha sido una constante a lo largo de esta última década, pero la falta de presencia social, la evaporación del partido como «asociación civil», que este último año ha puesto de manifiesto, no tiene como causa única, y pienso que ni siquiera principal, la tan cacareada desproporción. Lo problemático no es su existencia, patente desde un primer momento y harto explicable por causas bien conocidas, sino que no haya hecho más que crecer, hasta el punto que el acceso al gobierno

**No basta con
modernizar sino
que hay que hacerlo
desde una
perspectiva de más democracia.**

haya coincidido con la práctica desaparición del partido como «asociación civil».

El partido ha crecido en la última década a buen ritmo, multiplicando por 40 el número de afiliados. Ahora bien, además de organizar a las personas con mayor grado de conciencia y de vocación políticas, el impulso principal de estos últimos años ha sido la urgencia de cubrir una buena cantidad de cargos públicos: no faltaron ni faltarán en el futuro candidatos suficientes. Pero una vez cubierto el cupo —de cada tres militantes uno ocupa un cargo público— el reto consiste en hacer atractivo el partido para aquellos ciudadanos políticamente comprometidos, empeñados en cambiar su entorno social, pero que no aspiran a convertirse en políticos profesionales. Aunque lo hemos mencionado repetidas veces, no parecemos muy dispuestos a hincar el diente al problema principal: identificar los factores que convergen en el hecho de que el militante de base se siente superfluo o manipulado. Problema que está

estrechamente vinculado con otro no menos decisivo: «el partido sigue sin resolver con claridad cuál es el trabajo de los militantes en relación con la sociedad» (pág. 53), cuestión, por lo demás, clave para un partido socialista que basa su estrategia a largo plazo en la correlación y mutuo apoyo de la acción institucional y la social.

Para encontrar soluciones adecuadas a estos intrincados problemas de nada sirven las declaraciones de buenas intenciones por parte de la dirección del partido y de muy poco las especulaciones que cada uno podríamos tejer a nuestro antojo. Necesitamos un estudio científico serio que adelante algunas hipótesis de trabajo, en base a una información suficiente, tanto de los problemas internos como de los sectores sociales a los que preferentemente habría que dedicar la mayor atención; por lo menos una cosa debería estar clara: no se puede penetrar en el «tejido social», dirigiéndose globalmente a la «sociedad», con las técnicas propias de la campaña electoral. Desgraciadamente, la única «sociología del socialismo español» que conozco, la de José Félix Tezanos, ha conseguido el milagro de recopilar una buena cantidad de datos sobre los afiliados y los cuadros del partido sin plantear un solo problema real y significativo. Si este es el modelo de «sociología empírica» —parece más bien la caricatura— se comprende la crisis profunda por la que pasa esta disciplina.

Sin averiguar las causas de la limitadísima presencia social difícilmente pueden detectarse los remedios. Propio de la acción política, sin embargo, es que hay que tomar decisiones —lo peor es siempre la paralización acogidos a la duda— aún cuando no dispongamos de la información pertinente. Desde un primer momento, el partido ha tenido conciencia de esta divergencia —resulta demasiado obvia para poder ignorarla—, pero impotente para remediarla, hemos quedado sobrecogidos

Hay que identificar los factores que convergen en el hecho de que el militante de base se sienta superfluo o manipulado.

ante su alcance: el poder institucional ha ido en aumento hasta alcanzar la cúspide, mientras la penetración social se ha ido congelando en un pío deseo. Y no es que no se haya discutido el tema en todos los niveles de la organización, ni hayan faltado esfuerzos para darle una respuesta. Dos, cuanto menos, conviene mencionar.

La primera consistió en intentar restablecer la tradición de las «casas del pueblo». En la etapa que precedió a la guerra civil el partido estaba profundamente enraizado en la clase obrera por medio de una extensa red de «casas del pueblo»; pero la España de la segunda mitad de los setenta tenía ya muy poco que ver con la España de los años treinta: otra es la estructura social y muy diferentes las formas de vida, la cultura propia, de las nuevas clases, obreras y media, que han surgido en el proceso de industrialización de las dos últimas décadas del franquismo. La base social del partido rompe con una noción estricta y sociológicamente desfasada de clase obrera, aunque, en un sentido restringido, aporte todavía el 36 % de los afiliados. La «casa del pueblo», producto original de una cultura obrera hoy desaparecida, estaba desde un principio condenada al fracaso como instrumento de penetración social.

La segunda respuesta, mucho más acorde con el grado de desarrollo alcanzado por la sociedad española, puede designarse con el término de «acción sectorial». Supuesto básico, que sigue siendo válido, es que la acción del partido tiene que diversificarse, acoplándose a las condiciones específicas de cada destinatario. Ciertamente, estos grupos no son muchos ni especialmente combativos: la sociedad española muestra una muy limitada disposición a organizarse autónomamente. Además, los pocos que existen se caracterizan, bien por su cerrazón, vinculados a inte-

reses muy particulares, difíciles de articular en una política global, bien por su exclusivismo, subrayando un solo punto de vista que, siendo de interés general,

**Existe relación
entre el número de afiliados
y la presencia social,
pero no una directa
y sin mediaciones.**

han hipertrofiado como el único prioritario. Nada tan difícil pero también tan necesario como la acción sectorial que parece, sin embargo, haberse agotado en la creación de «secretarías de acción sectorial», de las que en muy pocos años se ha pasado de esperar demasiado de ellas a no tomarlas apenas en consideración. Urge indagar las causas de su aparente fracaso, debido, sin duda, a las dificultades que ofrecen los grupos sociales que han conseguido cierta entidad, pero también a la poca flexibilidad de la organización para cumplir estas tareas.

2.

Ocioso buscar respuestas adecuadas cuando los problemas no se formulan con un mínimo de precisión. Y, justamente, lo que distingue a este tipo de documentos, confeccionados con retazos de muy distinta calidad, no es sólo la falta de rigor, sino el afán subyacente de encubrir tanto o más que lo que se quiere manifestar. Aunque se espere del gobierno y cual compete al partido. Ciertamente encubrir tanto o más que lo que se quiere manifestar. Aunque se espere del gobierno que «diga la verdad, aún cuando las cosas vayan mal para los intereses políticos del gobierno» (pág. 14), tampoco se trata de regodearse en una autocrítica corrosiva que parezca más bien autoflagelación. El deber de llamar a las cosas por su nombre es propio del oficio intelectual y no del político. La misión de este último no es *decir*, sino *hacer* bien las cosas; a veces para poder hacerlas conviene no mencionarlas o mencionarlas de través. Nadie pretende medir con el mismo rasero un documento de partido y en ensayo político, pero ello no significa que un partido que ha asumido la responsabilidad de go-

bernar puede presentarse a la opinión pública con un texto escrito con tanta negligencia y precipitación. Saltan a la vista omisiones importantes, repeticiones inne-

cesarias, incoherencias, ambigüedades, hasta su buena dosis de ingenuidades. Reprimiendo mi vocación de maestrillo, no voy a caer en la tentación de señalarlas con el puntero; sin demasiado esfuerzo el lector atento sabrá descubrirlas por sí mismo.

Aparte de llamativas deficiencias formales, el documento arrastra una confusión básica que afecta esencialmente al contenido: no logra deslindar, en cada uno de los temas tratados, qué labor se espera del gobierno y cual compete al partido. Ciertamente que a través de todas sus páginas subyace el principio elemental de que la primera obligación de un partido en el gobierno es gobernar de acuerdo con sus programas, sabiendo además que con la acción gubernamental no se agotan las tareas de un partido socialista, pero los distintos autores de los diferentes capítulos —escritos cada uno sin conocimiento de los demás— resuelven o evitan la cuestión cada cual a su aire. Los hay que centran su atención exclusivamente en la acción del gobierno, como si en este campo el partido no tuviera nada que hacer ni que decir («La lucha contra la crisis económica y el paro»), mientras que otros («La política internacional», «La política cultural») se ocupan tan sólo de la acción del partido, sin mencionar, siquiera de paso, la del gobierno. ¿Cabe tal vez detectar en este silencio una crítica implícita? Se llega así a la paradoja de establecer como objetivo el conseguir una mayor «homogeneización» (pág. 55), proponiendo como medio adecuado la explicación —que no discusión— de un documento que lo es todo menos «homogéneo».

A modo de ilustración volvamos la mirada a la cuestión clave planteada anteriormente: divergencia creciente entre

poder institucional y presencia social. El documento presenta dos versiones al respecto. Para los autores de la «introducción» el problema es de orden «interno» y se reduce a «la desproporción existente entre el poder institucional acumulado por el partido y su nivel de desarrollo orgánico» (pág. 7). Si el problema consiste en que el partido se ha quedado pequeño para cumplir las tareas impuestas por el momento histórico, el remedio es obvio, «lograr un incremento sustancial y ordenado de la afiliación». Los autores del último capítulo, «El PSOE como asociación civil», en cambio, son ya conscientes que las cosas pueden ser un pelín más complicadas y lo inscriben en una perspectiva realista, la del incremento de la presencia del partido en la sociedad hasta conseguir la «hegemonía social». Aumentar la militancia, qué duda cabe, es un problema interno, pero en el sentido de

que hay que hacer atractivo al partido, no como instancia de poder, en esta dirección ya se ha llegado a la cúspide, sino como instrumento de transformación so-

cial; para aumentar el número de afiliados hay que saber previamente para qué se necesitan, cuáles sus tareas, y no simplemente sus derechos y deberes estatutarios. Pero también uno externo, en cuanto implica el modo de relacionarse el partido con la sociedad más allá de la acción institucional. Existe, desde luego, relación entre el número de afiliados y la presencia social, pero no una directa y sin mediaciones: puede aumentar el número de afiliados y disminuir la presencia social; así en el caso de que la organización se mantuviera cerrada en sí mismo, sin otra preocupación en sus militantes que desempeñar tareas institucionales.

La relación partido-sociedad es mucho más compleja que lo que el documento insinúa en estas dos versiones. Al faltar un análisis medianamente serio, no ha de sorprender que las soluciones ofrecidas se distinguan por su «sancta simplicitas».

Con la mentalidad del buen comerciante, se proponen repetidas y continuadas campañas de publicidad. Es fácil barruntar que las técnicas que sirven para vender coca-cola no sean las más apropiadas para que un partido político adquiriera la «hegemonía social», pero por lo menos ocuparán a la organización en confeccionar y repartir (?) folletos y harán su agosto las imprentas y los técnicos de publicidad. Se añade además un cándido deseo: el que «todo militante participe en un movimiento social autónomo» (pág. 56), sin entrar a considerar no ya sólo si resulta factible sino incluso operativo en las actuales condiciones. Quizá habría que vencer algunas dificultades previas para que pudiera funcionar.

Algunos más sabidos, que ya han tirado al desván de los trastos viejos cualquier idea de socialismo que conlleve una

**La mayoría
de los nuevos afiliados
se irán reclutando
entre los funcionarios
públicos.**

alternativa al orden social establecido, sonreirán para sus adentros convencidos de que la única «hegemonía social» posible consiste justamente en la primacía

institucional. Desenmascarar así la pretendida complementariedad de la acción social e institucional como parte de un discurso ya desfasado, característico de aquellos lejanos tiempos en que se estaba a muchas leguas del poder. En el fondo, es la perspectiva propia del político profesional que no concibe ni aspira a otra acción que la institucional: la acción social, cuando no consiste en la simple adhesión acrítica a lo que se hace desde las instituciones, son ganas de alborotar el gallinero, y bastantes son ya las fuentes de desorden y los problemas a los que hay que dar una solución. Cuando el partido no cuente más que con políticos profesionales y aspirantes a serlo, se habrá diluido la peliaguda cuestión de las relaciones, en el interior, de los políticos profesionales con los ciudadanos comprometidos, así como la genérica de la acción institucional y lo social. En esta misma lógica, se pasará a denunciar la

retórica del cambio, aduciendo que ya se ha hecho desde las instituciones mucho más que lo que reclama y puede encajar la sociedad. Si hay que criticar un defecto, únicamente el ritmo demasiado acelerado de las reformas emprendidas. Pero entonces también el término de socialista habrá quedado degradado a una simple marca comercial para designar una política liberal, modernizadora en la escasa medida que lo tolere el orden social constituido.

3.

Plantear la cuestión de la afiliación insuficiente comporta otra mucho más compleja, la de la relación del partido con la sociedad que a su vez, refiriéndose a un partido que ha asumido la responsabilidad de gobierno, supone diferenciar nítidamente la acción institucional de la social. Ambas han de ser, desde luego, complementarias, en cuanto provienen de un mismo partido con un mismo objetivo, pero de ningún modo puede reducirse la segunda a la mera proyección entusiasta de todo lo que se haga desde las instituciones, porque pierde así, en la sociedad, toda relevancia y credibilidad, sin atraer a otro tipo de militante que aquel que pretende hacer méritos para pasar un día a tareas institucionales. Ni que decir tiene que, en estas condiciones, la mayoría de los nuevos afiliados se irán reclutando entre los funcionarios públicos, como ha ocurrido en otros partidos europeos que han detentado largo tiempo el poder. No hace falta insistir en las perturbaciones graves que conlleva esta politización partidista de la Administración, máxime en España, donde la neutralidad política del funcionario es un valor recién adquirido y está todavía muy a flor de

piel la confusión franquista de mezclar lo administrativo con lo político, el servicio público con la adhesión política. Mientras no se planteen esta serie de

Una estrategia que no se monte en el vacío tiene que empezar por un análisis conciso de la situación del país.

cuestiones con un mínimo de rigor, la organización permanecerá encerrada en sí misma, sin la menor presencia social por grande que sea la institucional, semejando cada vez más al partido de cuadros tradicional, que lo es todo mientras está en el poder y nada cuando pierde la posibilidad de recuperarlo. Sin una presencia social significativa, el Partido Socialista no podrá llevar a cabo su proyecto de transformación social, no ya en sus aspectos realmente democratizadores, sino ni siquiera en los modernizadores más modestos. Los socialistas, abocados a las urgencias diarias de la acción de gobierno, no pueden perder de vista su responsabilidad histórica, tanto respecto a un pasado que obliga como, sobre todo, a un futuro lejano y si se quiere utópico. Una política que merezca el título de socialista no puede tener el presente como única referencia.

El documento reconoce al final implícitamente el papel del partido como vanguardia social que articula las necesidades mayoritariamente sentidas, dándolas forma política para una acción futura. «El partido tiene que ir por delante del gobierno en la tarea de diseñar el futuro y preverlo. No puede ir por detrás. El día que se produzca una situación tal significará que el partido ha sido absorbido por la acción del gobierno y ha quedado anulada su capacidad de renovación del proyecto socialista» (págs. 62-63). Palabras atinadas que no tenemos más que aplicar al documento para enjuiciarlo cabalmente. En efecto, si lo juzgamos en base a este criterio, tendremos que admitir que lamentablemente ese día nefasto ya ha llegado. Insistiendo en la necesidad de una perspectiva futura y llamando al documento nada menos que de estrategia, o bien se reproduce la acción del gobierno, definida ya, en sus líneas generales,

en documentos anteriores, con pocas menciones aunque muy significativas a los problemas que hayan podido surgir en su aplicación, o bien, se consignan los pro-

pósitos puntuales de algunas secretarías, que más que en un documento de estrategia encajarían en un informe de gestión.

Para unos el socialismo se agota en el actual programa de modernización; para los otros supone algo más.

del Estado de las Autonomías, y se cuida mucho, con la sola excepción del tema, altamente conflictivo, de la reconversión industrial, de mencionar un solo con-

Una estrategia que no se monte en el vacío tiene que empezar por un análisis conciso de la situación del país, identificando los problemas principales y el modo de su interconexión. Establecidas las prioridades en base a este análisis, hay que clasificarlas en un orden temporal: unas son de la máxima urgencia, otras actuales, otras a corto, mediano o largo plazo. Evidentemente, no se puede hacer todo a la vez, ni hacer unas cosas sin haber hecho otras previamente. Pero es imprescindible mencionarlas en un orden de prelación para que sepamos a qué atenernos y no tengamos la impresión que se ha tirado la carga más valiosa por la borda. Además, una estrategia no sólo define objetivos en un orden cronológico sino que considera también las dificultades, conflictos, apoyos y oposición que implica su articulación en una acción política. No hay política que pueda levantar un consenso unitario. Una vez definidas las prioridades y detectados los posibles conflictos, cabe diferenciar las tareas que competen a las instituciones de aquellas, más conflictivas o que no cuentan todavía con un apoyo mayoritario, que recaen sobre el partido, en cuanto asociación civil, determinando el tipo de ayuda que debe prestar a las instituciones en los conflictos previstos.

Pues bien, el documento en cuestión, por vez primera en este tipo de documentos, renuncia a un análisis de la situación global del país sustituyéndolo por el del partido en esta coyuntura histórica; comprime el necesario análisis de la situación política a unas consideraciones sobre los partidos políticos, que no son más que parte de la articulación política de la sociedad española; no roza ni siquiera la cuestión del nacionalismo periférico, supuestamente resuelta con la construcción

flicto posible en la realización de los objetivos previstos: llama especialmente la atención este silencio al tratar de la reforma administrativa.

Faltos de los análisis más elementales donde extraer los criterios básicos para definir prioridades, en un verdadero maremágnum de confusión se superponen «los objetivos que están pendientes en España desde hace siglos (?) y que podemos sintetizar en tres: a) la consolidación definitiva del régimen democrático; b) la modernización de las estructuras sociales, comenzando por el propio aparato administrativo (sic); c) la culminación de la construcción del Estado de las Autonomías» (pág. 1); los que se denominan «los grandes retos que se nos presentan en la presente etapa», que incluyen «a los grandes problemas de la nación española», entre ellos de nuevo dos de los «objetivos pendientes desde hace siglos», «la reforma de la Administración y la construcción del Estado de la Autonomías» (pág. 10), y por último los llamados «objetivos estratégicos» (págs. 8 y 9) que se revelan estrechamente «orgánicos».

No puede sorprender esta reducción del horizonte a los aspectos meramente orgánicos al haberse sustituido el análisis de la situación del país por el de la situación del partido. Los «objetivos estratégicos» no provienen de un análisis inexistente de la situación de España: ésta impone simplemente «retos» y «objetivos históricos» que al parecer no necesitarían de más precisa consideración. Ciertamente que en el documento ya se advierte que el PSOE «es un partido todavía excesivamente cerrado en el que la mayor parte de la actividad del militante es in-

terna y orgánica» (pág. 53), pero algunos no sospechábamos que la cerrazón llegara a este punto. A la hora de redactar un «documento de estrategia» el partido se mira al ombligo y no da de sí más que una perspectiva «orgánica».

4.

«El partido debe ser capaz de mantener sus zonas de acción autónoma con respecto al gobierno y sobre todo debe tener la capacidad de diseñar el futuro y renovar el proyecto socialista» (pág. 62). Quedan así patentes las deficiencias intrínsecas del documento medidas por sus propios criterios: ni se especifica, en cada campo, las zonas de acción autónomas más allá de la mera gestión orgánica ni, desde luego, se diseña el futuro ni mucho menos se renueva el proyecto socialista. Criterios que lo son tan sólo de los redactores del último capítulo, sin que hayan incidido o hayan sido tomados en consideración por los redactores de las demás partes; incluso, cabe detectar diferencias sustantivas entre la opinión de los redactores de la «introducción», para los que el «socialismo democrático» se reduce a una «política de progreso y modernización», y los de la última parte que aspiran a una hegemonía social «que se corresponda con la hegemonía pública conseguida». «Esta hegemonía la ejerce porque presenta su ideología y su proyecto como programa intelectual ante la clase o clases que son su ámbito de movilización y a las que por ello aspira a representar» (pág. 52).

Como «proyecto intelectual», el documento enciende los carrillos de cualquier socialista; su interés consiste en que pone de manifiesto dos posiciones nítidamente diferenciables en el interior del partido: para unos el socialismo se agota en el actual programa de modernización; para

El reto que tienen planteado los socialistas es llevar adelante una política prudentemente estabilizadora sin desnaturalizar el proyecto socialista.

los otros supone algo más, por confuso y titubeante que se presente. Las contiendas internas que rebasen el marco de lo meramente personal se librarán en lo sucesivo entre los «modernizadores», para los que la sociedad capitalista resulta el único modelo concebible, y los que aferrados a la idea del «socialismo democrático», como un proceso permanente de democratización de la sociedad y del Estado, se atreven a mantener una dimensión utópica que rompe con los actuales perfiles de las instituciones políticas y sociales. Sólo para estos últimos tiene sentido la dura faena de diseñar un futuro diferente, que comienza con el análisis estricto de las circunstancias dadas y pasa por una presencia creciente de los socialistas en los sectores sociales con mayor dinamismo y capacidad de transformación.

Estas diferencias quedan aminoradas por un mismo empeño que unifica no sólo a todos los socialistas sino a éstos con la inmensa mayoría de los españoles: consolidar la democracia. Es este el primer objetivo, indiscutido y primordial, de una estrategia socialista. Todos los demás, dar una salida a la crisis económica, reforma de la Administración, puesta en funcionamiento del Estado de las Autonomías, etc., se justifican en cuanto resultan imprescindibles para afianzar la democracia. En una democracia todavía prendida con alfileres, los socialistas tienen un margen estrechísimo de acción entre dos peligros igualmente graves: contribuir involuntariamente a la desestabilización, al rozar, por poco que se descuiden, alguna de las estructuras establecidas de poder; desnaturalizarse por completo, convirtiendo la necesaria política de estabilización democrática en una puramente conservadora. El reto que tienen planteado los socialistas españoles es llevar adelante, con buen tino, una política prudentemente estabilizadora sin desnaturalizar el proyecto

socialista. Empeñados todos en un mismo esfuerzo por la consolidación de la democracia —lo que impide, por lo pronto, cuestionar frontalmente el orden socio-económico existente—, la manzana de la discordia, sin embargo, se presenta hoy entre los que aceptan sin reserva la lógica

del sistema capitalista, como si fuera la última expresión de la razón económica, y los que, barajando posibles alternativas, pretenden una salida innovadora de la crisis que empiece por repartir mejor las cargas y abrir algunos resquicios para una futura acción democratizadora del sistema.
